

El ritmo de expansión económica de América Latina será el más modesto de los últimos cinco años. Los pronósticos para el crecimiento del PIB se ubican en el rango del 1.0%-1.5% en 2014 (2.5% en 2013, 2.9% en 2012), y se recuperarán ligeramente en 2015 hasta el 2.0%-2.5%. Factores externos, tales como unos menores precios de las materias primas explicados principalmente por la desaceleración económica en China, un encarecimiento del financiamiento externo y unas perspectivas de entradas de capital más limitadas contribuyen a este proceso de desaceleración. Si bien la heterogeneidad del crecimiento sigue presente en la región y en parte está asociada a diferentes estrategias de gestión económica, estas proyecciones suponen el final de una década de mayor crecimiento económico de América Latina con respecto al promedio de la OCDE.

Para impulsar el crecimiento potencial y la equidad es necesario seguir avanzando en reformas estructurales. El crecimiento de la productividad continúa siendo modesto con respecto a los países OCDE y otras economías emergentes y, a pesar de las mejoras recientes, América Latina es aún la región más desigual del mundo. En particular, las bonanzas de recursos naturales y de flujos de capital de corto plazo hacia la región no se han reflejado en un incremento del crecimiento económico potencial de la región. Reformas para fortalecer la educación, las competencias y la innovación han de favorecer la expansión del potencial de crecimiento y la productividad a través de una mejora de las capacidades de los trabajadores. Igualmente, deberán garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a una formación de calidad.

El contexto político, tras la celebración de 14 elecciones presidenciales entre 2012 y 2014 en América Latina, ha abierto una ventana de oportunidad indiscutible, y su aprovechamiento condicionará el bienestar de la región, sobre todo en el largo plazo. Estas reformas son esenciales para afrontar la trampa del ingreso medio y posicionar mejor a la región dentro del proceso de desplazamiento de la riqueza mundial hacia el mundo emergente. En contraste con la evolución de algunos de los países europeos y asiáticos en las últimas décadas, que han alcanzado niveles elevados de ingreso per cápita, los países de la región, salvo Chile, Uruguay y algunas economías del Caribe, no han registrado avances considerables en el proceso de convergencia de renta con las economías avanzadas. Una mejor inserción de la región al desplazamiento de la riqueza mundial mayor dotación de competencias, incluyendo las capacidades blandas, que permitan una mayor adaptabilidad y una búsqueda más eficiente de nichos competitivos en un entorno cambiante.

En la actualidad, la probabilidad de que una empresa de América Latina que opera en el sector formal de la economía enfrente problemas operativos serios como consecuencia de un déficit de capital humano es casi tres veces mayor que para aquellas empresas radicadas en Asia del Sur. Ello se agrava al considerar la elevada informalidad que incide sobre los trabajadores y sobre el tejido empresarial. Para mejorar las competencias laborales se precisan acciones tanto dentro de la educación general como a través del sistema de formación técnica. No solo persiste una alta proporción de trabajadores con bajos niveles de formación en ocupaciones que requieren competencias básicas, sino que además los retornos de la educación han ido disminuyendo desde hace más de una década. Es ineludible invertir en la mejora de los programas de educación y formación técnica y profesional. Son especialmente relevantes los relativos a competencias de carácter general o blandas, que faciliten el acceso al mercado laboral al finalizar el período formativo y permitan a los actuales trabajadores adaptarse a un mercado laboral cambiante, actualizando sus competencias.

Se precisan marcos de cualificaciones a nivel nacional y regional para el reconocimiento y portabilidad de competencias, adquiridas en contextos formales o informales. Una colaboración coordinada entre el sector público y el sector privado es necesaria para lograr estos objetivos. La educación debe ser percibida no solo como un motor del crecimiento económico, sino también de inclusión social y reducción de la desigualdad. Entender la educación como un vector de mayor cohesión social y de crecimiento inclusivo es crítico para América Latina, dado que su trayectoria de desarrollo se verá en gran parte vinculada a las políticas en este campo. En este sentido, una mayor y mejor inversión en educación es una prioridad para los países de la región con el fin de seguir impulsando una mayor cobertura acompañada de mayor calidad. Si bien se han alcanzado importantes logros en materia de inversión, aún persisten grandes desafíos de extender una cobertura de calidad en la mayor parte de los niveles educativos.

La inversión pública en educación en la región ha aumentado significativamente en los últimos años, situándose en promedio ligeramente por encima del 5% del PIB, cerca del 5.6% en el promedio de la OCDE en 2012. Ello ha permitido lograr prácticamente el acceso universal a educación primaria. No obstante, la cobertura sigue siendo baja en pre-primaria (66% de la población concernida en América Latina, frente al 83% en la OCDE en 2012), al igual que en educación secundaria (74% frente al 91% en la OCDE) y terciaria (42% frente al 71% en la OCDE). Adicionalmente, la calidad de educación sigue rezagada. En educación secundaria, la diferencia entre el desempeño de los estudiantes en América Latina y la OCDE equivale a casi dos años de escolaridad de acuerdo a las pruebas PISA 2012.

Una combinación de políticas puede impulsar la mejora de la calidad de la educación para todos. La extensión de la cobertura de la educación temprana debe proseguir, fomentando el desarrollo de competencias blandas, tales como la socialización o perseverancia, que son primordiales para el futuro laboral. Las políticas docentes dirigidas a incorporar incentivos para retener y motivar a educadores de calidad deben reforzarse gracias al diseño de procesos de contratación rigurosos. Las políticas del aula, que no demandan necesariamente recursos elevados, han demostrado su efectividad, por lo que es importante favorecer un ambiente disciplinario que conduzca al aprendizaje y proveer oportunidades para todos los estudiantes, mediante acciones pedagógicas, como son el tiempo de instrucción y las expectativas de los profesores sobre el desempeño estudiantil. Los recursos educativos han de favorecer un mejor desempeño de los estudiantes provenientes de entornos socioeconómicos más bajos. Finalmente, resulta fundamental mejorar los sistemas de evaluación y acreditación de los centros educativos.

Los esfuerzos en la mejora de la educación y de las competencias laborales deben complementarse con avances en el área de innovación. El stock de capital de innovación, que representa una medida adicional de las competencias, es significativamente inferior en América Latina (13% del PIB) que en los países de la OCDE (30% del PIB). Además, en la región este activo se compone esencialmente del stock de educación terciaria, mientras en países de la OCDE se basa en el gasto en actividades de I+D. En general, el gasto en I+D en América Latina está sustancialmente por debajo de la OCDE, destacando la poca participación de las empresas. Es fundamental que se robustezca la gobernanza de las instituciones del

sector de ciencia y tecnología, con el objetivo de desarrollar un marco institucional eficiente y completo para la difusión de la tecnología y la innovación. Para impulsar mayores recursos, la atracción de Inversión Extranjera Directa supone una oportunidad para el desarrollo de competencias e innovación en América Latina, pero ello requiere vincular más estrechamente estos flujos de inversión con las políticas de innovación y cambio estructural.

Documento completo en:

[http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37445/S1420759\\_es.pdf?sequence=1](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37445/S1420759_es.pdf?sequence=1)

Fuente: CEPAL